

ALLENDE Y LA SOCIEDAD CHILENA CONTEMPORANEA (*)

Jaime Ramírez Faúndez

Universidad Autónoma Metropolitana de México.

16 páginas

Al igual que la insurrección armada el poder se legitima a partir de principios del derecho natural...

Aquél 11 de septiembre de 1973 fuimos testigos de una de las grandes paradojas de los procesos políticos de este siglo. Uno de los más fervientes partidarios de la vía pacífica al socialismo en América Latina moría combatiendo, resistiendo, junto a un pequeño puñado de hombres, una ofensiva militar masiva que utilizando todos los medios bélicos disponibles asalta el palacio presidencial. Se reprime a sangre y fuego la inédita experiencia de transformación social que buscaba transitar al socialismo a través de la transformación de la institucionalidad existente, preservando las libertades democráticas, lo que atrajo la atención y apoyo de vastos sectores de la sociedad mundial que veía en éste proceso una vía alternativa para la realización del proceso emancipatorio.

A 25 años del aquel suceso procuramos esbozar una visión crítica de la sociedad chilena actual, (presentada otra vez) como un ejemplo a seguir. Por un lado en tanto exitosa experiencia de transición (sólo comparable con la española) y por otro ; como un milagro económico en América Latina. Esto es, nos muestra cómo se puede superar una de las dictaduras más sangrientas del continente sin grandes alteraciones y conmociones sociales y ; cómo una economía pequeña puede modernizarse aceleradamente para poder así competir y reinsertarse ventajosamente en los flujos y redes de la economía global.

Consideramos que la forma más adecuada para retratar la sociedad chilena actual es desde la perspectiva de tres distintos procesos modernizadores que en ella se han intentado. A saber : la revolución en libertad de la democracia cristiana, la transición al socialismo de la UP y la contrarrevolución pinochetista cuyo modelo económico, en lo fundamental, fue continuado por los gobiernos democráticos que surgen de la transición pactada con los militares. En esta perspectiva histórica, la historia no se considera como *magistra vitae* sino más bien, como una autorreflexión consciente de nuestra propia situación que, por estar inserta en la historia, queda irradiada, tanto por el pasado como por el futuro. Esta aproximación, pensamos, es el sustento más adecuado para mantener aquella idea del proceso civilizatorio como un proceso emancipador en donde los sujetos prueban convertirse en autores de su propia historia en base a su voluntad y a su conciencia y no se reducen a meros instrumentos de una legalidad ciega emanada desde férreas determinaciones de la globalidad ; el progreso tecnológico y la "ausencia de alternativas" al mercado después del derrumbe del socialismo real.

Para nuestra generación el 11 de septiembre de 1973 es una de las fechas que sacuden nuestra consciencia y nos obligan a una reflexión. Esta fecha nos hace

retroceder y pone ante nuestros ojos el ascenso y caída de uno de los más ambiciosos e imaginativos procesos de transformación social que hayan sucedido en nuestro continente. Así mismo, esta fecha nos recuerda el espantoso fracaso de una tradición libertaria y democrática que se veía así mismo como privilegiada en el seno de las naciones latinoamericanas.

Ello nos obliga a efectuar un escrupuloso examen de dicha tradición ; pues ella misma, sirvió y sirve para explicar y justificar ideológicamente el irracionalismo que aflora y crece hasta hacerse hegemónico en el seno de la sociedad chilena, permitiéndole asimilar el brutal régimen militar y la ambiciosa contrarrevolución económica, política, social y cultural que otorga el sentido y articula todas las acciones reformadoras que contemplaba el proyecto dictatorial.

Al poco escarbar en esta tradición nos encontramos con una forzada selectividad del acontecer histórico, cristalizada en una "historia efectual", peculiarmente mutilada de todas los aportes culturales de aquellos actores sociales y políticos que se autoorganizan para recuperar su libertad y preservar su dignidad y formas de vida. Quizá con mayor esmero aún, se olvida la extrema crueldad presente en todas las represiones continuas y sistemáticas a los movimiento populares que "amenazaban" el orden vigente de la clase privilegiada mediante sus reivindicaciones y conquistas.

Y precisamente, como producto de esta mutilación histórica de la tradición es que no se puede explicar satisfactoriamente el origen de dos procesos de decisiva importancia para la sociedad chilena : la Unidad Popular y la contrarrevolución pinochetista. Ambos procesos aparecen ajenos, extraños a esta tradición. Se ven impuestos forzosamente, desde fuera de ella.

De esta manera el despliegue de la creatividad de los más amplios sectores sociales que caracteriza el proceso modernizador de la UP no puede comprenderse como un proceso endógeno, fruto de una memoria histórica que -como constituyente principal de la tradición, acumula y sedimenta propósitos ; formas organizativas y diseños estratégicos que distinguieron singularmente el proceso chileno, mismos que conforman el legado cultural, social y político que esta experiencia entrega al proceso universal de emancipación.

De igual modo, la sanguinaria contrarrevolución pinochetista no puede comprenderse al interior de esta estereotipada visión de la tradición democrática chilena. ¿De donde salió tal ferocidad y autoritarismo? ¿De donde emana el proyecto fundacional que reniega radicalmente de la institucionalidad hasta esa época prevaleciente ? ¿Cómo es que se desechan tan fácilmente los arreglos y acuerdos existentes entre los distintos actores sociales ?

Estas son algunas de las preguntas que procuramos contestar en la parte dedicada al régimen pinochetista. Por ahora nos sirven de introducción a esta sintética visión acerca de los procesos modernizadores.

El proyecto modernizador de la democracia cristiana "La revolución en Libertad". 1964-1970

Esta búsqueda de la modernidad tiene múltiples significados, propósitos y mentores. Indudablemente, uno de sus orígenes se debe ubicar en aquellos proyectos que Estados Unidos pretende realizar en el continente desde 1962. Inspirado por las tesis keynesianas acerca del progreso y de la ayuda a los países pobres, como también por consideraciones geoestratégicas ; el gobierno estadounidense impulsa el cambio estructural en los países latinoamericanos.

Este cambio no sólo suponía la ampliación y/o generación de mercados internos necesarios para el proceso de industrialización, sino que también la transformación de sus instituciones y y la modificación de las prácticas sociales y políticas de las clases dominantes tendientes a la instauración y consolidación de instituciones democráticas. Estas consideraciones generaron el programa "Alianza para el progreso" concebido como el instrumento más eficaz para detener la ola revolucionaria, que recibe un considerable impulso desde la experiencia cubana.

A pesar de esta innegable influencia externa, sin embargo, es necesario tener cuidado. El proyecto reformista democristiano no es una experiencia exótica alejada completamente de la tradición política chilena. Por el contrario es parte constituyente de la misma.

En este sentido podemos ubicar el origen el proyecto político de la democracia cristiana que tiene como inspiración los postulados de un reformismo social que se presenta en la vida política chilena en 1938 a través de la Falange Nacional, constituida por una fracción de la juventud conservadora que niega su apoyo a la candidatura de los partido liberal y conservado y en cambio apoya abanderado del Frente Popular ; el primer gobierno en la historia política chilena que integra a los partidos comunista y socialista a las tareas y responsabilidades de gobierno.

Más tarde esta corriente política encuentra sustento en desarrollo del pensamiento social de la iglesia católica, (especialmente las encíclicas papales de Juan XXIII dedicadas al mundo del trabajo) en donde los jesuitas juegan un rol muy importante, particularmente en su crítica al mundo capitalista.

La idea clave es que el sistema capitalista debe ser renovado. Los actores principales de esta transformación son los miembros iluminados de las clases privilegiadas. La caridad cristiana es la que posibilita esta peculiar toma de conciencia del problema social que posibilita el compromiso individual en una peculiar misión en éste mundo : la construcción de un sistema más humano y más justo. De esta manera, las clases dominantes ponen a disposición del resto de la sociedad los recursos humanos, técnicos, científicos y económicos necesarios para posibilitar la construcción de un nuevo orden social. Otros actores destacados en esta estrategia del cambio social son los "marginados" de la sociedad capitalista.

Los marginados son todos aquellos sectores sociales que no disfrutan de las ventajas y beneficios que ofrecen las sociedades modernas. Estos sectores sociales están doblemente excluidos. Por una parte, están privados de las ventajas de la modernización capitalista y por otra ; no participan activamente en la vida social y política pues no han sido integrados a las organizaciones opositoras tales como los partidos políticos de izquierda y sindicatos, quedando fuera de las conquistas del movimiento obrero organizado y ajenos a la práctica política y social de dichas organizaciones políticas.

Esta hipótesis sobre el cambio social y el esquema de alianzas sociales y políticas que se concibe determina, en medida importante, los principales objetivos del proyecto político de la democracia cristiana y, por consecuencia, las tareas programáticas del Gobierno monocolor de Frei. Entre ellas conviene destacar : la chilenización del cobre y la movilización de sus excedentes hacia la modernización del aparato industrial; la reforma agraria y la sindicalización campesina y ; la organización de amplios sectores urbanos marginados (pobladores) aglutinados a partir de programas de construcción de viviendas.

La chilenización del cobre, en lo esencial, se presentó como la alternativa a la nacionalización de las minas en manos extranjeras. Se suponía que la integración del interés nacional con el de las empresas productoras permitiría alcanzar mayores ventajas que la nacionalización, pues así no se interrumpiría el proceso de negocios y se preservarían los mercados. El Estado chileno se integraba como socio de las empresas productoras norteamericanas mediante la compra gradual de las acciones de las mismas, asegurando de esta manera un flujo de inversiones, (principalmente recursos externos canalizados a través del Eximbank 80 %) que posibilita el desarrollo a largo plazo de dichas actividades económicas.

La reforma agraria era uno de los puntos nodales del programa de gobierno. Se trataba de un ambicioso proyecto modernizador del mundo rural que no sólo modificaría las relaciones económicas y sociales preexistentes sino que también, restaría importantes bases de apoyo político a los proyectos más conservadores de la sociedad chilena, que en forma clientelar manipulaban el voto campesino. Su propósito era liquidar la gran propiedad improductiva (ya sea por mala explotación o por abandono de la tierra) reasignándola a 100.000 campesinos en propiedad individual.

Sin embargo, los objetivos de la reforma agraria se limitan a modificaciones en la tenencia de la tierra ignorando el complejo sistema de relaciones campo-ciudad , especialmente las estructuras oligopólicas que controlan la intermediación de los productos agrícolas, así como aquellas que regulan el crédito y la asistencia técnica a los productores. Además, el proceso de redistribución de la propiedad agraria se lleva a cabo en un momento poco propicio. en que la importancia de las actividades agrícolas como generadoras de renta habían decrecido enormemente.

Por otra parte, en tanto que esta redistribución de la tierra contemplaba indemnizaciones a los antiguos propietarios y aportes extraordinarios para la capitalización de los nuevos propietarios, el Estado debía asegurar ingentes recursos económicos que debería trasladar desde las áreas más desarrolladas de la economía hacia el campo, cuestión que posteriormente cobra decisiva importancia, ya que esta necesidad de recurso no sólo impacta negativamente a las finanzas públicas sino que también - y quizá de mayor trascendencia, sacude y altera el esquema de alianzas sociales del proyecto democristiano.

Otra medida programática importante fue indudablemente el ambicioso intento de movilización de los sectores marginales urbanos, concentrados en cinturones de miseria alrededor de los centros urbanos a raíz de las fuertes corrientes migratorias del campo a la ciudad en los años sesenta. La dotación de servicios y la construcción de viviendas para estos "pobladores" se conciben al interior de un cuidadoso diseño de movilización social y política en el programa gubernamental llamado "Promoción popular". En este programa especial énfasis se otorga a los esfuerzos dedicados a la organización de las mujeres en los "centros de madres.

Estos centros son concebidos como instancias de socialización al mismo tiempo que células económicas, objetivos que se realizaban en la generación de talleres artesanales, familiares y/o vecinales, que tenían como fin la satisfacción de necesidades propias y, de manera limitada, la producción de bienes destinados al mercado.

El proyecto democristiano fue concebido y desarrollado en un largo período. Involucra a un grupo importante de la sociedad chilena y encuentra (no las construye) las condiciones de viabilidad de su proyecto en las elecciones de 1964, cuando los sectores políticos conservadores se unen en una santa alianza contra el marxismo. La DC emerge de las elecciones como un partido hegemónico. Han elegido un presidente con una amplia mayoría, dominan con holgura ambas cámaras del Congreso. Para gobernar no precisa de alianzas políticas.

Se genera una ola democristiana, particularmente activos en sindicatos y organizaciones estudiantiles y colegios profesionales. Recibieron un fuerte apoyo externo no solo del gobierno estadounidense sino que también de la Alemania Federal y de Italia. Cabría preguntarse entonces: ¿Cuáles son las razones que frustran este proyecto modernizador?

El éxito del programa gubernamental descansaba primordialmente en el incremento drástico de la renta cuprera, en tanto que se proyectaba un incremento de la producción minera de 400.000 tons a más de 1000.000 tons. Otros supuestos decisivos eran la rápida absorción de créditos externos y la eficaz movilización del excedente entre los distintos sectores y agentes económicos.

Para asegurar la realización de estos dos últimos supuestos se partía desde una posición privilegiada. Las inversiones del sector público representaban más del 75% de la inversión geográfica bruta y el número y distribución sectorial estratégica de las empresas del Estado podrían haber permitido la asignación expedita y eficaz de los recursos de acuerdo a las prioridades del programa de gobierno.

Empero, estas condiciones aparentemente óptimas para asegurar una eficaz intervención estatal en la economía no eran condiciones suficientes. En el programa de gobierno no se tomó en cuenta la disputa de los recursos estatales por parte de los distintos sectores económicos que presionan en distintos niveles y con los más diversos recursos y argumentos a las autoridades estatales. Un ejemplo de la eficacia de estas presiones se visualiza en el rol que juegan las empresas del Estado. En efecto, las empresas estatales se convierten, en gran medida, en unidades de transferencias de recursos, dedicando el 47% de sus fondos al sector privado no financiero (1).

Por otro lado, es preciso considerar que los sectores privados empresariales no se guían por consideraciones extraeconómicas ni mucho menos por los planes de desarrollo esbozados por el gobierno. Mas bien, se dedicaron a proyectos de alta rentabilidad y rápida fructificación dejando, entonces, trunco el programa de modernización industrial y la capitalización de agro reformado. Lo anterior aunado a la imposibilidad de elevar impuestos hace que la actividad económica tenga severas restricciones y no se cumplan las metas programáticas. En el gobierno de Frei no se logra superar el estancamiento económico crónico, acompañado de una inflación estructural de las más elevadas del mundo. A ello, se debe agregar la política de endeudamiento externo que genera la deuda per cápita más alta del mundo después de Israel en 1970. Estas condiciones críticas de la economía tienen

importantes repercusiones sociales y políticas. Se acumulan tensiones y contradicciones importantes que incluso propician un abortado intento golpista en 1968.

La expresión política de estas contradicciones se visualiza con mucha nitidez al interior del partido gobernante cuando uno de sus más importantes dirigentes Rafael Gumucio señala : ".. el desarrollismo, o sea la tendencia a concebir y llevar adelante el desarrollo dentro del sistema capitalista es una ilusión. Creer que la empresa privada y el capital extranjero son los medios eficaces para salir del subdesarrollo y dinamizar la economía, es creer en una receta archifracasada en todo el mundo subdesarrollado" (2) Pronunciamiento de este tipo hacen que el Consejo político-técnico del partido de gobierno proclame la "vía de desarrollo no capitalista".

El elemento central de esta vía no capitalista de desarrollo era la empresa comunitaria caracterizada por una apropiación de los medios de producción de todos los trabajadores de la unidad económica, organizados bajo un sistema que les permita la administración de la misma (autogestión). Dichas empresas comunitarias concurrirían a un mercado de capitales organizado por el Estado y operan bajo las directrices de un Plan nacional de la economía.

Esta orientación ideológica fue rápida y eficazmente combatida por Eduardo Frei quien en enero de 1968 logra modificar la correlación de fuerzas al interior del PDC logrando instalar una dirección que apoya incondicionalmente el gobierno, separándose de manera tajante de estas críticas al sistema capitalista. Esta reorientación política ideológica del partido gubernamental prepara las condiciones de significativas escisiones partidarias pero, sin embargo, paradójicamente, no logran impedir que el candidato del PDC a las elecciones de 1970 Radomiro Tomic retome las banderas de la sociedad comunitaria y las críticas a la explotación de la sociedad capitalista.

El espacio dedicado a esta experiencia modernizadora frustrada y la peculiar síntesis que de ella ofrecemos busca destacar el hecho de que las medidas programáticas anticapitalistas de la UP no son privativas de los partidos de izquierda. Estuvieron presentes en otros sectores e instituciones de la sociedad chilena.

El proyecto modernizador de la Unidad Popular 1970- 1973.

La conquista del gobierno por parte de la coalición de partidos políticos denominada Unidad Popular no fue fruto de la improvisación o de coyunturas extraordinarias. Obedece a una maduración de los procesos políticos de la izquierda y a una estrategia política que va más allá de las estrategias particulares de los principales partidos de dicha coalición : el partido socialista y el partido comunista y en alguna medida importante puede ser atribuida directamente a la concepción de Allende acerca del proceso chileno. Cabe recordar que su candidatura fue aprobada por el comité central del PS en una votación en que triunfaron las abstenciones sobre los votos afirmativos. Por su parte, el PC , hasta el último momento, estuvo presionando por candidaturas presidenciales distintas a la de Allende. Primero trabajando la idea de apoyar la candidatura de Radomiro Tomic y más tarde propiciando la candidatura del candidato del MAPU Jacques Chonchol. Cientos de miles de manifestantes esperaban impacientes en una concentración pública la

proclamación del candidato de unidad por parte de las directivas de los partidos en una reunión de la UP. En ella Allende impuso su propia candidatura.

La tesis de Allende se basaba en la apreciación de una cierta correspondencia entre el desarrollo institucional y el desarrollo de las fuerzas sociales. Dicha correspondencia posibilitaría que el desarrollo de las fuerzas sociales progresistas generara - al interior de la institucionalidad vigente, los factores que permitirían su cambio e incluso su superación ; en tanto que ciertos rasgos de dicha institucionalidad fueron fruto justamente del desarrollo del movimiento popular.

La idea de que era posible el entendimiento y negociación entre las fuerzas políticas existentes para respetar las reglas del juego que impone el respeto a la legalidad, canalizando a través de ella los proyectos para su transformación profunda no era ingenua o fuera de la realidad. La viabilidad del proyecto residía en la capacidad de obtener y mantener las siguientes condiciones :

- el reconocimiento de las restricciones geoestratégicas que impone el poderío estadounidense en América Latina. Dichas restricciones buscaban superarse manteniendo la independencia del gobierno chileno de los dos bloques de poder y su integración al movimiento de no alineados ;
- el mantenimiento de las libertades individuales y los derechos sociales y económicos básicos de la sociedad capitalista (propiedad privada y libre mercado) que se armonizan y coexisten con los derechos de las organizaciones colectivas económicas : "las empresas de los trabajadores" en el marco de una economía mixta, donde el Estado es el responsable y juega un rol protagónico en el desarrollo nacional ;
- la reiteración de la vía pacífica al socialismo que contemplaba como elemento central la disposición de que el sentido y ritmo de la transformación social sería determinada en función del respeto de las mayorías expresadas en votaciones libres y secretas. Lo anterior, hace explícita la posibilidad de alternancia en las posiciones de gobierno, de acuerdo a los resultados electorales alcanzados por los partidos políticos que disputan, en condiciones equitativas, el poder ;
- un incremento rápido y significativo del bienestar de las clases populares, cuestión fundamental para consolidar y acrecentar el apoyo ciudadano necesario para cambiar la adversa correlación de fuerzas en el parlamento, lo que permitiría a su vez, transformar la legalidad en función de las necesidades del proceso reformador.

Las posibilidades de generar y mantener dichas condiciones, en gran medida, estaban dadas por los procesos sociales y las concepciones sobre el desarrollo nacional que surgen a partir de la acumulación de problemas tales como el desempleo crónico, una distribución inequitativa del ingreso, carencia de servicios básicos, etc. fenómenos que inevitablemente acompañan a las crisis económicas recurrentes. De esta manera, para una parte importante de los actores políticos y sociales, se evidencia el agotamiento de las tesis desarrollistas y se propician críticas severas al modelo capitalista de acumulación y a sus pautas de redistribución del ingreso, reclamando propuestas alternativas.

En este sentido es que se deben considerar las propuestas modernizadoras alternativas (entre las cuales ubicamos tanto el esbozo de la sociedad comunitaria como el proceso de la Unidad Popular). Son respuestas alternativas a aquel modelo que imperaba en los años sesenta en América Latina. En esa época se postulaba

que la salida del subdesarrollo era posible, simplemente copiando las experiencias de los países capitalistas avanzados y más aún, se podría realizar en tiempos históricos menores, debido a la ayuda externa, la difusión del progreso tecnológico y la concepción y puesta en marcha de un modelo deliberado de crecimiento económico.

En términos concretos la estrategia de desarrollo propuesta por la UP pasaba por la recuperación para el país de los centros y mecanismos económicos más importantes a través de la nacionalización y estatización, todo ello bajo la guía de un plan nacional de desarrollo.

Después de casi dos años de gobierno el balance no era tan desfavorable. Se habían recuperado todas las riquezas básicas (cobre, salitre, hierro y carbón). El comercio exterior estaba, en su mayor parte, regulado por el sector público. Se había nacionalizado casi totalmente el sistema financiero lo que permitía dirigir más del 90% del crédito interno.

En este mismo período se había expropiado más de 2.637 predios extinguiendo casi por completo la estructura latifundista. El 60% de la tierra irrigada cultivada estaba ya en el área reformada (3). En lo referente al sector industrial y comercial, la mayor parte de las empresas de importancia pasaron bajo el control de los trabajadores y del gobierno creándose un área social de la economía que reunía a las empresas públicas existentes antes de noviembre de 1970 a las que se habían incorporado otras 55 empresas.

Un hecho que es necesario destacar es que todas estas transformaciones estructurales fueron acompañadas por una importante tasa de crecimiento económico. Entre 1971 y 1972 se obtuvo una tasa de 7,1%. Este crecimiento se logra utilizando en forma plena la capacidad productiva existente e incrementando la inversión.

El incremento del bienestar de los sectores populares se refleja en la generación de 300.000 nuevos empleos pero por sobre todo en la redistribución del ingreso. Los sueldos y salarios constituyen un 65% de la renta nacional, un incremento de 14 puntos en relación a la situación imperante entre 1965- 1970. Eso explica que el consumo de las personas crezca en un 12% en 1971. Este mismo efecto positivo se observa sobre el comportamiento de los indicadores sociales de salud, vivienda y educación.

Cabe destacar que este comportamiento positivo de la economía se produce en un contexto de transformaciones estructurales que normalmente conllevan perturbaciones importantes en un sistema social. Además, se realiza en un momento en que se interrumpe casi por completo la ayuda externa. Por ejemplo los recursos de corto plazo baja de 220 millones de dólares en agosto de 1970 a unos 20 millones a inicios de 1972. (4)

Sin embargo, el mantenimiento de estas condiciones que posibilitarían el desarrollo de la institucionalidad que posibilitaría y legitimaría los cambios profundos al sistema social y económico (tal como era requerido por gran parte la sociedad chilena), imponía, a su vez, serias restricciones a las libertades de maniobra que el ejecutivo tiene sobre el aparato gubernamental.

En efecto, dichas restricciones afectarán posteriormente, de manera importante, la gestión económica del "Estado Interventor" por parte del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, no es sólo el mantenimiento de las condiciones lo que limita la gestión pública de la economía. Quizá de mayor importancia aún es el hecho de que los mecanismos que aseguran la reproducción económica en un Estado intervencionista, por mucho superan la organización y procedimientos formales que regulan el funcionamiento del aparato estatal.

En un Estado Interventor, aparentemente, las autoridades gubernamentales disponen de múltiples normas, instrumentos y mecanismos para la regulación eficaz de las operaciones económicas más importantes, empero ; en la realidad, son los grupos de poder económicos quienes disponen de las conexiones y relaciones que permiten, mediatizan o incluso inhiben el cumplimiento de las decisiones tomadas. Estas presiones son las que influyen en todos los niveles del proceso decisional del aparato estatal por lo que, las posibilidades - de las más altas autoridades estatales - de incidir significativamente en la realidad económica se encuentran seriamente limitadas por el escaso poder operacional de sus instrumentos.

A estos problemas inherente a la gestión del Estado Interventor es necesario agregar los problemas políticos al interior de la coalición gubernamental y los desafíos que va generando, en forma programada, la estrategia de la contrarrevolución.

En efecto, la actividad política de los partidos de la UP no fue diseñada para la generación y mantenimiento de las condiciones que permitían la viabilidad del proyecto modernizador al interior de la institucionalidad. Los partidos socialista y comunista se disputan la hegemonía y la dirección de todos y cada uno de los procesos e instancias de poder que se van generando en el transcurso de la experiencia modernizadora. Cada uno quiere imponer su visión particularista de la situación y pocos dirigentes están conscientes de la extraordinaria complejidad del modelo y de la precariedad del mismo. Mucho menos perciben las dimensiones y responsabilidades que asumen con su propio pueblo en esta etapa histórica tan reducida temporalmente (1000 días) y tan llena de acontecimientos trascendentes para la sociedad chilena.

La oposición rápidamente se reordena después del triunfo popular. El componente militar de dicha estrategia empieza a operar desde el mismo 4 de septiembre de 1970. Ese día el intento del jefe militar de la guarnición de Santiago ordena sacar a la calle tropas y tanques minutos antes de que se conocieran los resultados finales de la elección, con el pretexto de sofocar los posibles desmanes. En octubre se realiza el intento de secuestro y asesinato del comandante del ejército quien en repetidas ocasiones había manifestado su respeto a la voluntad popular expresada en la urnas. Así, antes de que Allende asumiera su función presidencial, una conspiración civil y militar, integrada por importantes políticos e incluso alentada i financiada por empresas extranjeras ("los papeles de la ITT" así lo confirman) mostraba su voluntad de impedir a toda costa el gobierno de la UP.

Pero hubieron otras insurrecciones militares, tales como la de marzo y septiembre de 1972 y la del 20 de agosto de 1973 que fueron sofocadas al interior de los cuarteles. El 29 de junio de este se derrota un golpe en la calle, cuando tropas insurrectas, liderados por el regimiento de blindados, combaten a civiles

desarmados en la ciudad de Santiago, donde incluso el palacio presidencial fue rodeado de tanques amenazando su destrucción.

Pero la estrategia de la subversión era mucho más compleja que simples insurrecciones militares. Los medios de comunicación fueron centralmente organizados y a través de ellos se fue realizando una sofisticada manipulación de la sociedad. El desabasto generalizado de bienes de primera necesidad fue provocado deliberadamente y se inicia con productos tales como pasta dental, cigarrillos, detergentes y papel sanitario. Todos estos productos tenían en común de que no eran perecibles, y su producción y distribución era controlado por empresas oligopólicas y cuyos dueños formaban parte activa en los planes subversivos.

Esta técnica ya se había ensayado con éxito en Brasil en 1964. En Chile se perfecciona y logra provocar un desabastecimiento generalizado de todos los productos no perecibles, a pesar de que la producción de los mismos se había incrementado en forma importante. Si a esto se le agrega un desequilibrio entre la demanda y la oferta producto de un incremento sustantivo de los salarios reales se puede explicar la espiral inflacionaria que azota Chile con particular fuerza en 1973.

Otro elemento importante de la estrategia golpista fue la movilización de las capas medias y sus organizaciones sociales. Estudiantes, colegios profesionales y los sindicatos patronales de pequeños comerciantes, transportistas, etc. se movilizan en un permanente hostigamiento a las autoridades de gobierno que culmina en el famoso paro patronal de octubre de 1972 que tenía como objetivo desquiciar completamente la economía con el fin de propiciar las condiciones para el derrocamiento del gobierno.

Además de las colosales fuerzas internas desatadas y retroalimentadas por el plan contrarrevolucionario cabe agregar la agresión externa del imperio, dirigida personalmente por Kissinger que además de acciones encubiertas - incluso de sabotaje - (ver el informe de la comisión del senado estadounidense de F. Church) diseña amplias medidas de boicot comercial y financiero. Chile es aislado, la Unión Soviética y el campo socialista apoyan tímidamente al régimen de Allende, reconociendo la zona de influencia norteamericana. En estas condiciones cabe preguntarse : ¿Cómo es que duró tanto la experiencia de la Unidad Popular ? ¿De donde surgieron las capacidades y recursos para enfrentar la sedición y al mismo tiempo llevar a cabo importantes tareas transformadoras ?

La respuesta a estas preguntas está en la capacidad de movilización y autoorganización de las clases populares y la capacidad política de Allende.

Hubo una suerte de división del trabajo. Allende y algunos de sus colaboradores en el gobierno se encargaron de mantener las condiciones que sustentaban su proyecto político, que el Presidente mantuvo hasta el último día de su mandato. Los altos dirigentes políticos dirimían los conflictos por la hegemonía y por la captura y mantenimiento de pequeños espacios y cuotas de poder. Los militantes, los dirigentes y activistas sociales asumían, simultáneamente, las tareas de gobierno y las tareas de movilización de amplios sectores populares. Así es que surge el poder popular.

Cuando los empresarios y profesionales (médicos, ingenieros, economistas, administradores) abandonan o sabotean la generación de bienes y servicios los

trabajadores asumieron las tareas de control y gestión en empresas, hospitales, etc. El desarrollo del proceso social despliega energías y un desusado talento de los trabajadores. La imaginación sube al poder. Los grupos sociales reinventan incesantemente formas organizativas que permitan movilizar y administrar recursos que mantienen en pie la economía. Los consejos de administración en las empresas del área social, los sindicatos y los cordones industriales, las organizaciones de pobladores (comandos comunales y juntas de abastecimientos) los comando comunales campesinos y cooperativas de trabajadores, establecen relaciones horizontales de colaboración y de consulta. Se reúnen y organizan para intercambiar experiencias y recursos productivos, así como para las tareas de seguridad de las instalaciones productivas. Estas instancias sirvieron también para superar la parálisis de ciertas estructuras partidarias y su correlato en las instituciones gubernamentales, ya que el sectarismo y la disputa por parcelas de poder no fructificaban en el seno de estas organizaciones.

La contrarrevolución social, política y económica es derrotada por esta estrategia descentralizada y difusa que levantan las organizaciones sociales, que aunque autónomas y muchas veces críticas al gobierno, son capaces de reorientar algunas tareas del aparato estatal para coordinarlas con sus acciones y estrategias. Y por ello no hubo más remedio que acudir al último recurso : el uso extremo de todos los recursos bélicos contra la población civil a fin de aplastar a sangre y fuego la osadía de los sectores populares de pretender un nuevo y más justo orden social.

El proyecto modernizador de la contrarrevolución militar 1973-1990

En amplios círculos se critica la brutalidad del régimen militar pero, al mismo tiempo, se le reconocen méritos. Y entre los méritos principales se cuentan su estrategia económica y el rediseño institucional que sufre el aparato del Estado de corte claramente liberal. Sin embargo, el proyecto refundacional inicial fue ajeno a dichos principios.

En la Declaración de Principios de la junta militar se establece que la misión del Estado es la búsqueda del bien común, en cuyo logro se ejerce el principio de la subsidiaridad que reconoce, en el plano económico, el rol protagónico del individuo y de la empresa privada. Al Estado se le asigna un rol arbitral y de regulación del proceso, con el fin de cuidar que las actividades de los grupos intermedios no alteren los objetivos últimos del Estado : asegurar la consecución del bien común que va más allá que la procuración del bienestar y no se remite simplemente a cumplir la voluntad de la mayoría.. (5)

Al igual que la insurrección armada el poder se legitima a partir de principios del derecho natural, considerados elementos constitutivos centrales del proyecto refundacional y que son derivados de la tradición. No es un cuerpo de ideas que rompe abruptamente con el curso de la historia lo que se constituye como la doctrina de la dictadura. Por el contrario los principios arrancan del "verdadero pasado histórico", de aquél "..cuya validez está abonada por los siglos" (6)

La junta militar se resiste a asumir un papel meramente policial destinado a borrar la amenaza de cambio social y devolver a los partidos tradicionales el poder para que inevitablemente, se reprodujesen las condiciones que posibilitaron el ascenso de Allende al gobierno. Había que superar el sistema institucional basado en los principios de la democracia representativa pues este sistema permitía algo tan "irracional" como que el marxismo llegara al poder por vía de las elecciones. (7)

Esta concepción estratégica se cristaliza en la llamada doctrina de seguridad nacional en donde todos los objetivos económicos, políticos y sociales deben ser subordinados a la lógica y necesidades de la seguridad nacional. Esta concepción estratégica explica la política económica y el diseño institucional de la primera época de la dictadura.

La primacía de la esfera económica sobre los límites estrechos de la doctrina de seguridad nacional comienza a construirse recién en los años ochenta y recibe un fuerte impulso después de la profunda crisis económica que explota en 1982. La salida de la crisis obliga a la liberalización de la economía y posibilita, al mismo tiempo, la concepción y puesta en práctica del modelo primario exportador donde juegan un rol primordial los discípulos de Milton Friedman, los "chicago boys".

La singularidad del modelo pinochetista de modernización es la combinación (aparentemente armoniosa) de políticas e instituciones económicas ultraliberales con concepciones políticas, sociales y culturales ultra conservadoras.

La élite de la sociedad chilena otra vez más muestra su adaptabilidad gatopardesca. Logra ajustarse a las demandas emanadas de las determinaciones que resultan de la imposición de un nuevo paradigma de racionalidad y eficiencia propagado por las redes globalizadoras y posibilitados por los colosales avances científicos y tecnológicos ; pero, al mismo tiempo, mantiene una sociedad estamental, con valores premodernos. Los oligarcas se convierten en empresarios que salen a disputar mercados internacionales. Aprenden a gestionar estructuras productivas flexibles ; son capaces de adaptarse a las heterogéneas, diversificadas y cambiantes necesidades de los mercados pero, conservan sus valores tradicionales a través de los cuales configuran y otorgan un sentido a su visión de la sociedad posible y deseable. Al lado de la meritocracia , subsiste la sociedad estamental y sus valores. De esta manera las normas y procedimientos mediante los cuales se ordenan y distribuyen las posiciones de privilegio y de dirección y liderazgo en las empresas e instituciones, obedece a dos lógicas distintas. Una lógica está basada en el origen social de los individuos y, la otra, en los méritos personales que posean los individuos.

Si a las consideraciones anteriores agregamos el hecho de que el proceso modernizador coactivo se realiza en un tiempo histórico singularmente acelerado comprenderemos muchas de las contradicciones que están presentes en el modelo chileno. Ante un convencimiento generalizado de ausencia de alternativas ; ante la disolución de todos los poderes de negociación de los sindicatos ; ante la ausencia de referentes políticos de oposición real al sistema y con ello, la desaparición de las prácticas políticas y sociales colectivas pero, por sobre todo, ante la amenaza de ser excluido del sistema los individuos y sus comunidades desarrollan estrategias de supervivencia. El elemento principal de dicha estrategia es la simulación. En efecto, ante la precariedad y/o de medios y recursos disponibles que son imprescindibles para adoptar los patrones de eficiencia, la simulan La capacidad mimética se convierte en la precondition para los individuos para desarrollarse exitosamente en su práctica social. Y esta es una de las contradicciones básicas de este tipo de sociedad.

La modernización es superficial al ser reducida a la mercantilización del conjunto de las relaciones sociales y a la apropiación de los patrones de eficiencia que posibilitan la competitividad individual. Así es que se propicia un individualismo exacerbado privado de identidad colectiva pues se han desechado todos aquellos

valores de solaridad y de cooperación que permitieron concebir y realizar tareas sociales colectivas. Para la mayoría de los individuos, la modernización simplemente significa la adopción de una serie de códigos e instrumentos desechables y una explotación sin medida de su fuerza de trabajo que es "recompensada" con el acceso masivo al crédito y al consumo.

En relación a la transición democrática cabe anotar que ella se ve posibilitada por una serie de condiciones y diseños estratégicos , en donde se combinan actores y factores tanto internos como externos. Uno de los mas importantes lo constituyó la resistencia a la dictadura que se expresa en la protestas que se inician desde 1982 y que debilitan seriamente la estabilidad social del régimen dictatorial. Pero este factor no fue considerado decisivo por los negociadores que determinan el itinerario y ritmo del proceso de transición a la democracia. La causa eficiente se ubica en la habilidad política de los negociadores y la amplitud de su visión de Estado. Los dirigentes de la concertación por la democracia aceptan un diseño institucional, claramente antidemocrático y antiliberal, con la esperanza que posteriormente este podría, con cierta facilidad, ser modificado. Lo que se acepta casi sin condicionamientos es el modelo económico.

En efecto en el programa de la concertación democrática "se reconoce la validez y necesidad de la apertura económica como un pilar central y el desarrollo exportado como uno de los motores principales del crecimiento para la economía chilena". (8) También, en ese mismo documento, se confirma , a nivel de dogma, la importancia del mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos y con ello ; la necesidad de una resolución gradual de los problemas esturcturales tales como el desempleo y la injusta redistribución del ingreso.

La realidad parece confirmar la validez de la estrategia económica. El exitismo y la autocomplacencia están presente en las reflexiones y conductas de una parte de la sociedad chilena. El comportamiento de la economía parece constituir un sustento suficiente a esta actitud. Sin lugar a dudas el crecimiento de la economía chilena es el más destacado en los último 15 años en el continente. De mantenerse las tasas de crecimiento de los primeros seis años de la década de los 90, en catorce años se duplicaría el producto per cápita. (9) Cabe hacer notar que este ritmo de crecimiento es bastante superior al desempeño económico de la dictadura que mediante una tasa promedio de crecimiento de un 1.7 para el período 80-89 necesitaría unos 40 años para duplicar dicho producto.

Además, este alto crecimiento ha sido acompañado por niveles también muy altos de ahorro e inversión lo que ha posibilitado entre otras cosas : una importante renovación de equipos e instalaciones productivas ; la superación de lo déficits de infraestructura, una intensificación significativa de los esfuerzos en materia de educación, capacitación y fomento productivo y un notable proceso de estabilización económica, todo ello acompañado de una importante acumulación de reservas internacionales. Todas estas características parecen confirmar que no encontramos frente a un patron de crecimiento autosustentable digno de ser imitado.

Pero hay más. Incluso el modelo de la dictadura militar, con modificaciones, se presenta a sí mismo como un acabado producto de una estrategia progresista, pues en él, se supera la trampa ideológica Estado versus mercado."...Lo central es preocuparse de que los mercados, las empresas, los grupos económicos, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado contribuyan de la mejor manera

posible al logro de los mayores niveles posibles de eficiencia, traducidos en una creciente disponibilidad de productos de mayor calidad y a precios cada vez más convenientes" (10).

El nudo de la estrategia reside en la necesidad y posibilidad de construcción de un círculo virtuoso entre competitividad, redistribución progresiva y sustentabilidad ambiental. "Para ello se requiere profundizar la estrategia de desarrollo progresista dotándola de instituciones y políticas públicas más adecuadas que permitan desarrollar una política de apoyo a la transformación productiva más pertinente y más articulada." (11).

Sin embargo algunos signos presagian cierto agotamiento de la estrategia, aún antes de los efectos de la crisis asiática. El patrón neo-primario exportador debe superarse mediante el desarrollo de una segunda fase exportadora la cuál en esencia implica la readecuación de la estructura productiva a fin de lograr exportar productos de origen industrial con mayor valor agregado, conjuntamente con una diversificación tanto en la oferta exportable como en el incremento de los mercados de destino de las exportaciones chilenas. El tránsito hacia la segunda fase del modelo exportador permitiría la integración de valor agregado local, el establecimiento de encadenamiento productivos intraindustriales e intersectoriales, incrementar el tamaño del mercado interno lo que generaría mayores condiciones de estabilidad a la economía ante la creciente inestabilidad e incertidumbre que están presente en los mercados mundiales.

¿Donde están los factores que inhiben un ulterior desarrollo del proceso modernizador ? : En la cultura. Y aquí, justamente, están los mayores déficits de la modernización propuesta para guiar la transición democrática. Esta afirmación nos guía a nuestras conclusiones

En la sociedad chilena existe una compulsión al olvido. Las experiencias límites impuestas por los largos años de dictadura pretenden ser exorcizadas a través del olvido y la mutilación de la memoria histórica. El silencio se impone como una Razón de Estado. Son silencios pactados, ofrecidos como sacrificios en aras de mantener la estabilidad y proseguir con el itinerario de la transición democrática. El olvido también sirve para la estrategia de reposicionamiento de Chile. Es necesario posicionarlo como un país confiable y válido transformarlo, incluso, como un modelo exitoso tanto del punto de vista del crecimiento económico como modelo de transición política sólo comparable con el modelo español.

Por ello , la figura de Salvador Allende es incómoda. Mucho más incómodo es su legado político y moral. Recuerda la fragilidad del entendimiento político pues proviene de una comunidad hipotecada por un pasado políticamente criminal.

No se puede recrear el consenso en la sociedad chilena si no se mutila su memoria histórica, pues es un consenso construido a partir de la presunta desaparición de las divergencias con respecto a los fines. Con ello, los proyectos políticos dejan de ser importantes, pues las diferencias se reducen a desacuerdos respecto a ciertas características del desarrollo socio-económico o referidos a cuestiones de operatividad y eficacia de las políticas públicas. De lo que se trata es asegurar la reproducción petrificada del modelo actual.

Todos los proyectos alternativos no son posibles ni verosímiles. La idea de la transformación radical de la sociedad no es solamente algo iluso sino que es

desacreditado como un resabio arcaico de la premodernidad que en ningún caso representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Ello, inevitablemente, conduce a la ausencia del debate político con respecto a los fines de la sociedad condicionando y reduciendo el valor de la política. Sin embargo, las repercusiones fundamentales de tal actitud se ubican en el campo de la cultura, especialmente en la recreación de las identidades colectivas.

El rechazo a enfrentarse a conciencia con el propio pasado impide el proceso de autocomprensión que articula y otorga sentido al desarrollo de los individuos y sus comunidades. La resistencia para enfrentar el pasado "aclarándolo" (11) impide conocer los hechos y las causas que frustraron un proyecto político y generaron una evolución política aberrante y, al mismo tiempo, mutila la propia historia, tanto desde el punto de vista de las generaciones implicadas en ella como de las generaciones atrapadas en ella.

Reconstruir un determinado drama histórico es por sobre todo es una tarea que se realiza con y para nuestros contemporáneos, con los cuales pretendemos comunicarnos en términos de igualdad. Lo anterior implica que no se trata únicamente de evidenciar comportamientos de los actores sino que también juzgarlos moralmente. Sin embargo, enjuiciar moralmente sólo es posible cuando la acción se desarrolla en un período histórico con un sistema de valores homogéneos. Si por el contrario, nos ubicamos en una época de disolución de un sistema homogéneo de valores, nos encontraríamos inevitablemente frente a expectativas diferentes, a menudo contradictorias con lo cual el diálogo se hace imposible.

Tampoco en esta destrucción del olvido no se trata de escribir una historia alternativa ; de lo que podría haber sucedido si, ya que es muy difícil y por demás inútil construir una representación del mundo si algo determinado hubiera sucedido de otra forma. Cuando ella se realiza estamos en el reino de la fantasía. Por otra parte, suponer que nada pudo haber sucedido de otra manera también es una falacia. Esto sería creer en la predestinación o en cualquier otro tipo de fatalismo.

Por último, reiteramos que sin la aclaración de nuestro propio pasado no podemos recuperar componentes culturales que son imprescindibles para la conformación y recreación de las identidades colectivas. La mutilación histórica ha dejado elementos culturales excluidos. Entre ellos los procesos culturales ocurridos en la Unidad Popular, los procesos culturales del exilio y los logros culturales de la cultura de la resistencia al régimen dictatorial. No podemos olvidar que en la economía actual uno de los componentes más importantes del valor agregado son los saberes que necesariamente deben ser derivados de la identidad y memoria colectiva que conforma nuestra tradición.

Notas

1. Felipe Rodríguez "Crítica de la Unidad Popular" Fontamara, Barcelona , 1995.
2. *ibid.*
3. Joan Garcés "El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende", Siglo XXI, Madrid, 1974.
4. *ibid.*
5. Arturo Fontaine "La declaración de principios del Gobierno de Chile" en "Nuestro camino" Ediciones Encina, Santiago, 1976.
6. *ibid.*

7 *ibid.*

8. Máximo Aguilera "Reflexiones sobre el desarrollo industrial exportador chileno" en Reflexiones socialistas sobre Chile, La liebre ilustrada, Santiago, 1996.

9. Oscar Landerretche "Reflexiones sobre la estrategia progresista para el desarrollo de Chile" en Reflexiones socialistas sobre Chile.

10. *ibid*

11. Junger Habermas "Más allá del Estado nacional" FCE, México 1998

(*) Fuente: Revista Glocal Nro. 2 México
pte



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME:
<http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a:
archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

